

Ecuador, enero 21: de la movilización indígena al golpe militar

Por Equipo de Coyuntura
(Centro Andino de Acción Popular)

Ni fue traición, ni fue derrota, ni fue triunfo; sino todo lo contrario. Suena a absurdo si se juzga por los “significantes” en los que concluyó el hecho. Se reforzó la derecha y ganó el proyecto oligárquico menos modernizador, asumiendo que la dolarización es irreversible.

L

o ocurrido el 21 de enero en Ecuador fue un drama en dos actos: uno público y popular, el de **la movilización indígena y el golpe militar**, transmitido casi en su totalidad por la televisión; y otro previamente preparado y dirigido entre bastidores por los políticos y sectores dirigentes y de partidos: **el derrocamiento del Presidente y la sucesión presidencial**.

Los estudios clásicos (E. Hobsbawn, B. Porshnev)¹ no han sido muy precisos al distinguir conceptualmente un **levantamiento** y una **movilización**. De acuerdo a investigaciones antropológicas y etnohistóricas, como las de S. Moreno, para el caso ecuatoriano y de Silvia Rivera para Bolivia,² en el área andina los **levantamientos** indígenas se caracterizan por ser una masiva **reacción** contra un estado de dominación y explotación acumuladas, que se desencadena a partir de un determinado incidente, y cuya finalidad consiste en enfrentar los poderes instituidos por medio de una manifestación violenta para impugnar el *orden establecido*. Las **rebeliones** tendrían un carácter más político, convirtiendo el levantamiento en un intento por derrocar los *poderes establecidos*. El levantamiento indígena tiene por sí mismo un efecto organizador limitado a la misma acción, es productor de su propia conducción y dirigencia, portador de cambios inmediatos, y tiene una especificidad social y étnica, excluyente de alianzas interclasistas.

La **movilización**, por el contrario, es la actuación de un movimiento ya organizado, que cuenta con una dirigencia, la cual planifica y conduce la acción, en la que los elementos **reactivos** se encuentran supeditados a los reivindicativos e incluso a los propositivos, y donde los discursos tien-



den a sobreponerse a la acción. La movilización es un arma de lucha a disposición de las organizaciones, y tiende más al fortalecimiento de éstas que al del mismo movimiento social, y los cambios que persigue se plantean a nivel social y en términos mediatos.

El indígena, como todo movimiento social, se encontraría sujeto a una contradictoria tensión de afirmar con mayor fuerza su especificidad étnica, a costa de reducir su eficiencia social, o bien de ampliar esta eficiencia en la sociedad en base de alianzas interclasistas con otros movimientos sociales pero en detrimento de su propia especificidad étnica. Si bien el movimiento indígena siempre estuvo atravesado por esta doble dinámica de su *forma étnica* y de su *forma clase*, algunas de sus organizaciones adoptaron de manera preferente la forma clasista (*ECUARUNARI*), mientras que otras ejercieron más bien su forma étnica (*OPIP*, *FOIN*, *Shuar*), o bien todas oscilaron entre períodos y episodios más o menos clasistas y étnicos, o bien combinaron ambas estrategias.

Sin embargo, nunca como en la movilización de enero del 2000 el movimiento indígena había entablado una aso-

ciación tan diversa y heterogénea: desde los tres más poderosos gremios públicos (petroleros, educadores, IESS), y organizaciones barriales vinculados por medio de sus dirigentes a clientelas políticas, hasta los mandos medios militares, pasando por partidos de la más variada composición. Pero esta conformación interclasista tan heteróclita, la larga preparación y planificación de una movilización tan anunciada, su distante conducción desde otros sectores, todo ello sirvió para que el movimiento indígena, más que parte de una movilización se convirtiera en la fuerza de choque de otros movimientos y fuerzas sociales sin la capacidad movilizadora de los indígenas, que de presionar por la renuncia del Presidente con la toma del Congreso, desembocaron en una toma étnico/cívico/militar del poder, que dio lugar a un derrocamiento del Presidente y a una sucesión presidencial.

Si bien los indígenas fueron los protagonistas en el escenario de la movilización, su participación no fue decisoria a la hora de la producción de los discursos y las decisiones. De hecho, nunca el movimiento indígena y sus dirigentes habían enunciado discursos, denuncias y reclamaciones tan ajenos a sus intereses y necesidades específicas. De regreso a sus comunidades los indígenas de Cotopaxi, de donde procedía el mayor contingente de los movilizados, eran muy conscientes de no haber ganado nada en el *happening*, al que les habían conducido a participar.

En el análisis del hecho y sus resultados, se observa que se combinaron tanto elementos previamente programados con otros más espontáneos, demuestra no sólo las recíprocas manipulaciones de las fuerzas políticas comprometidas en la movilización, sino que puso además de relieve la gran separación entre las reivindicaciones socio-económicas y las políticas; nunca fue tan esquizofrénica la distancia entre lo poco que se defendía y lo mucho que se atacaba. Lo que mejor revelaba el tenor de discursos con propuestas tan destructivas era la situación de una sociedad desesperada, porque no puede estar peor de como actualmente está, pero que al mismo tiempo tiene pánico ante cualquier cambio, que no sea también desesperado.

Una de las instituciones que sufren una profunda transformación es la comunidad indígena. Son cada vez mayores los signos de privatización en ella. Estamos ante serios conflictos de reprocesamiento de la relación individuos-comunidad, comunidad-familias. Esta tensión adquiere caracteres de violencia interna, en un espacio-territorio que cada vez se asemeja más al paisaje de villas miseria y menos al romántico entorno de lo campesino. Una situación muy compleja y peligrosa. La comunidad, dicho de otro modo,

el poder campesino comunal, tiende a buscar respuestas campesinistas, de desarrollo comunal. Los comuneros individuos, con escasos lazos de relación con la tierra, con cierta escolaridad, a veces profesionales, buscan participar, no ser marginados, del mercado capitalista, volviéndolo quizá más humano, menos concentrador. Por ello su reminiscencia a los años 70 del estado desarrollista que permitió alguna movilidad social, impulsado por la dictadura militar que gobernara entre el '72 y el '79.

A diferencia de los más tradicionales levantamientos y aún movilizaciones indígenas, los cuales siempre habían respondido a una dinámica que desde la exclusión se orientaba hacia una mayor participación e integración en la sociedad, la movilización de enero parecía responder a una dinámica inversa: orientándose de la integración (por muy precaria que ésta sea) hacia formas de exclusión socio-política (por muy desesperadas o aventureras que parezcan). Fue muy elocuente la constante demanda de un "parlamento popular" o la pública renuncia por escrito de algunos diputados a su representación parlamentaria.

A falta de impugnaciones directas, y de un discurso capaz de dar coherencia a fuerzas tan dispares, se adoptaron slogans de una gran carga simbólica, normativa y emotiva: la lucha contra la corrupción, contra la pobreza. Esto pone de manifiesto un problema de fondo, ya planteado

“En el análisis del hecho y sus resultados, se observa que se combinaron tanto elementos previamente programados con otros más espontáneos, demuestra no sólo las recíprocas manipulaciones de las fuerzas políticas comprometidas en la movilización, sino que puso además de relieve la gran separación entre las reivindicaciones socio-económicas y las políticas; nunca fue tan esquizofrénica la distancia entre lo poco que se defendía y lo mucho que se atacaba”

por Touraine³: en Ecuador, como en otros países latinoamericanos se acusa un gran déficit de producción ideológica. Las diferencias económicas, las desigualdades sociales, étnicas y regionales, toda esta heterogeneidad, que la política lejos de soldar o atenuar contribuye a radicalizar, obstaculiza cualquier **producción ideológica**, de ideas y valores, capaz de representar el sistema de relaciones sociales al interior de la sociedad y la idea que esta sociedad hace de sí misma. A falta de una producción ideológica se ha generado una intensa **producción doctrinaria**, excesivamente normativa, de contenidos mágico-simbólicos, pero con muy bajo nivel de racionalización. Esto hace que cada vez entendamos menos lo que nos pasa, y que los análisis políticos se vuelvan moralistas y pontificales.

Esto mismo da lugar a otro fenómeno que la movilización de enero puso de manifiesto: las luchas sociales enfrentan actores sociales antagonistas, pero al mismo tiempo confrontan versiones o propuestas diferentes de los "intereses compartidos" o del "bien común" o del "desarrollo colectivo", en un mismo proyecto de sociedad. El problema en Ecuador es que resulta muy difícil integrar estos componentes en luchas sociales, donde cualquier posibilidad o

la
movilización
indígena

alternativa es objeto de ataque y de rechazo por unos y por otros, donde todo desune, muy poco puede ser compartido y casi nada es percibido o vivido como interés común. Todo en los discursos de la movilización se volvía objeto de rechazo y de condena: desde el Presidente de la República hasta la Corte Suprema de Justicia, pasando por el Congreso; todo debía ser objeto de directa cooptación o participación popular. Esto patentizó la movilización de enero, y en tal sentido no fue casual que mientras en Quito se consumaba el golpe para derrocar al Presidente en Guayaquil se preparaba una consulta para legitimar la autonomía provincial. Mientras que en Quito, los protagonistas de la movilización se dirigían a tomarse el palacio de gobierno, otros se manifestaban en contra en la avenida de los Shyris.

Todo en los discursos se volvió objeto de rechazo y de condena: hasta la misma Constitución aprobada hacía año y medio por una Asamblea surgida de elecciones populares y de una consulta plebiscitaria. Y como para nada parecen haber servido la Asamblea Constituyente y el previo Referéndum hacía sólo dos años, vuelven a sonar nuevas demandas plebiscitarias y el obsesivo pedido de "revocación del mandato".

La movilización del 21 de enero fue otro climax de una costumbre que se está volviendo cada vez más peligrosa, en el ambiente de crisis por la que atraviesa el país desde hace unos años: las tomas masivas de las calles por fuerzas sociales y políticas de la más diversa índole, en las más insólitas circunstancias. Hemos presenciado multitudes manifestándose a favor de un banquero y pocas semanas después las mismas multitudes se manifestaban por las mismas calles, pidiendo la cabeza de aquel banquero ya en la cárcel.

Dentro de esta enmarañada trama, y más decisiva que la participación del movimiento indígena ha sido la participación militar, pues sin ésta el acontecimiento no hubiera tenido los efectos logrados. Intervinieron un sistema de elementos: a) la crisis institucional que supone la *reconversión* de unas FFAA, que parecen no haber procesado suficientemente su sentido histórico de defender la frontera contra el Perú, tras la firma de paz; b) el venezolano *síndrome Chavez*, significa una reconversión político mesiánica (salvífica) de las FFAA en una época de crisis; de hecho no es casual que sean los coroneles "héroes de Cenepa" los que protagonizan el golpe y que dos ex-generales diputados (Yandún y Moncayo) apoyen la rebelión; c) porque una crisis intrainstitucional había doblemente segmentado las FFAA: entre el ejército (de extracción más serrana) respecto de las otras ramas, marina y aviación más adscritas a la costa; y entre el escalafón de los jóvenes coroneles y los comandantes y generales, ya que la crisis económica afectó de manera muy directa el régimen salarial sobre todo de los mandos medios, y que en los últimos meses había provocado fuertes tensiones internas; d) la ideología castrense siempre "al servicio de la patria" justificaba la participación mi-

litar en una movilización contra el Presidente, al que la gran mayoría de la opinión pública nacional responsabilizaba de llevar al país a la bancarrota; e) en los últimos años el ejército, por una decisión institucional completamente autónoma, había ampliado e incrementado sus actividades en el desarrollo social del país, y particularmente entre las comunidades campesinas e indígenas, captando una gran adhesión entre dicha población; f) de hecho, la ayuda militar para la llegada de los indígenas a Quito sobre todo en su toma del Congreso y el final asedio al Palacio de Gobierno ha quedado suficientemente demostrada.

Si las FFAA ecuatorianas nunca han sido pretorianas, en la medida que no han ejercido su poder tras el trono, lo acontecido el 21 de enero del 2000, exactamente lo mismo que ocurrió el 6 de febrero de 1997, demuestra que en Ecuador no hay democracia sin el soporte de las FFAA.

■ Notas

1. *Rebeldes y Primitivos*, Ariel, Barcelona, 1968. *Los levantamientos populares en Francia en el siglo XIII*, Siglo XXI, México, 1972.
2. Segundo Moreno y Sublevaciones Indígenas en la Real Audiencia de Quito desde comienzos del Siglo XVIII hasta finales de la Colonia, 4ta. Edición PUCE, 1995, Quito. Silvia Rivera, *Oprimidos pero no vencidos, Luchas del Campesinado Aymara y quechua de Bolivia, 1900-1950*, UNRIS, Ginebra, 1986.
3. Ver al respecto: A. Touraine: *La palabra y la Sangre: política y Sociedad en América Latina*, Paris, 1988.

